

Derechos sexuales y (no) reproductivos en mujeres con discapacidad mental. Un abordaje desde el discurso jurídico

Karina A. Andriola, Instituto de Cultura Jurídica UNLP

Julieta Cano, Instituto de Cultura Jurídica UNLP

Eje temático: **7. Derechos sexuales y (no) reproductivos. Derecho al aborto.**

Palabras clave: **derechos sexuales y (no) reproductivos – mujeres con padecimiento mental y/o discapacidad mental – discurso jurídico**

I. La propuesta.

El objetivo en esta ponencia es presentar los avances de investigación sobre el discurso jurídico y los cuerpos de las mujeres, puntualmente abordando los derechos sexuales y (no) reproductivos de las mujeres con padecimientos mentales y/o discapacidad¹ en los procesos de determinación a la capacidad jurídica. Estos avances se enmarcan en el proyecto de investigación I+D UNLP 11/J151 “Acceso a la justicia de las mujeres: violencias y salud mental” financiado por la UNLP y ejecutado en el Instituto de Cultura Jurídica de dicha universidad, labor que se suma a las investigaciones en el marco de las tesis doctorales de las autoras².

Nuestro trabajo se enfoca en analizar el discurso jurídico producido en las sentencias judiciales de determinación de la capacidad, con el objeto de conocer cuál es el abordaje de los derechos sexuales y (no) reproductivos de las protagonistas de los procesos, y nos preguntamos: ¿Cómo son abordados los derechos sexuales y (no) reproductivos de las mujeres con discapacidad por los jueces y juezas que deben determinar su capacidad? ¿Son

¹ La discapacidad y los padecimientos mentales si bien son situaciones diferentes, la restricción de derechos cumplidos los requisitos del art. 32 del CCyC, en ambos casos se da en el marco de los procesos de determinación a la capacidad.

² El tema de investigación de Karina Andriola es “La perspectiva de género en las prácticas judiciales: una exploración de los procesos de determinación de la capacidad en el Departamento Judicial La Plata” para doctorarse en Derecho por la Facultad de Derecho de la UBA, mientras que Julieta Cano investiga el tema “Las mujeres: sus cuerpos y sexualidades. Un estudio sobre derechos sexuales y reproductivos a través de las sentencias sobre violación y aborto (Argentina, 2012-2017)” en el marco del doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP.

escuchadas estas mujeres por el poder judicial? ¿Permean los estereotipos de género sentencias de esta índole?

Las sentencias seleccionadas fueron dictadas posteriormente al 1 de agosto de 2015, fecha de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial (en adelante CCyC). La nueva codificación trae importantes avances, como la remisión expresa -en el art. 2- a la interpretación de sus normas desde la perspectiva de derechos humanos, y consagra un camino iniciado por la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad (CDPD) de 2007 y la “nueva” ley de salud mental (LSM) No 26.657 de 2011. Las sentencias fueron seleccionadas de la base de datos jurídica “La Ley *online*”, base de datos de suscripción paga, perteneciente a la editorial Thomson Reuters, una de las más grandes en cuanto a caudal de sentencias sistematizadas a nivel nacional³.

Las sentencias en los procesos de determinación de la capacidad jurídica⁴ son el acto procesal que efectivamente determina y detalla los derechos de los cuales una persona puede verse limitada en su ejercicio. El CCyC establece la regla de que la capacidad se presume y resulta un derecho transversal, garantía y habilitante a los demás derechos (CDPD, principios generales y art. 12; LSM, arts. 3 y 5) y tal como establece el art. 24 del CCyC solo es limitable a personas mayores de 13 años (aunque pueden prolongarse sus efectos de por vida) a través de una sentencia judicial en el caso de cumplirse los requisitos del art. 32 del CCyC⁵ estando facultadas para iniciar el proceso las personas establecidas en el art. 33 del CCyC.

La sentencia, que debe ser revisada cada 3 años, es el acto que deberá “*determinar la extensión y los alcances de la restricción y especificar las funciones y actos que se limitan, procurando que la afectación la autonomía será lo menor posible*” (art. 38 última oración) y debe reunir los requisitos mencionados en el art. 37 CCyC, entre ellos detallar los recursos personales, familiares y sociales existentes, y consignar el régimen de protección, asistencia y promoción que garantice una mayor autonomía posible. La

³Vale aclarar que aunque *Thompsons Reuters* es una editorial prestigiosa en el campo jurídico, no encontramos explicitados el criterio editorial de búsqueda, selección y/o sistematización de las sentencias que integran la base de datos.

⁴ Aquí hacemos referencia a la capacidad jurídica de ejercicio, la cual es contemplada en el art. 23 del CCyC, que contempla la posibilidad, de además de su titularidad su ejercicio.

⁵ A saber: a) tener un adición o alteración mental), b) que sea permanente o prolongada, que sea grave, y c) que pueda dañar a su persona, a sus bienes y/o a terceros.

sentencia de restricción de la capacidad produce el nacimiento de figuras tuitivas: los apoyos o la curatela (esta última sólo reservada para casos donde la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interactuar con su entorno y manifestar su voluntad). Conjunta o independiente puede también dictarse salvaguardias (art. 37 inc. d y última oración del art. 38 y 43), hechas a la medida del caso lo que implica un reconocimiento a lo único y original de cada persona⁶.

II. Discurso jurídico y derechos sexuales y (no) reproductivos

El discurso jurídico, como producto del campo jurídico, trasciende los hechos lingüísticos para convertirse en un conjunto de prácticas (Costa, 2016) que legitiman, autorizan y resignifican otros discursos sociales, políticos y culturales. Las sentencias son tanto producto del discurso jurídico como productoras del mismo, y pueden pensarse como prácticas discursivas que reproducen y refuerzan la legitimidad del patriarcado, o por el contrario, una herramienta de resistencia a la asignación de sentidos patriarcales sobre los cuerpos y sexualidades de las mujeres.

Pensar al derecho como un campo de disputas (Bourdieu, 2000) presupone pensar en diversos actores pujando por tener el privilegio de asignarle “el sentido original” al derecho. A través de las sentencias, a través de los artículos de doctrina, a través de la enseñanza, y a través de las presentaciones judiciales, diversos actores disputan por asignarle distintos sentidos al derecho, y construyen el discurso jurídico heterogéneamente. El discurso jurídico, como producto y resultado de estas disputas de poder, va cambiando sus sentidos manifestándose a veces como expresión de un paradigma patriarcal, y otras veces como expresión de un paradigma emancipatorio para las mujeres, reconociendo y respetando sus derechos humanos. Las sentencias judiciales, construyen y constituyen parte de este discurso.

Dentro de los derechos sexuales y (no) reproductivos (Brown, 2014) que hoy se encuentran en la agenda de los movimientos de mujeres y feministas, la vivencia de una sexualidad placentera, la soberanía sobre el propio cuerpo, la posibilidad de una maternidad deseada, eligiendo cuándo y cuántos hijos/as tener, la libre orientación sexual, la capacidad

⁶ Para profundizar sobre el tema puede consultarse Andriola (2017).

de protagonizar y decidir sobre los procesos de embarazo, parto, puerperio y aborto, se entienden como aspectos centrales para el ejercicio de la autonomía de las mujeres. Brown (2014) entiende que los derechos (no) reproductivos y sexuales ocupan un lugar estratégico porque las prácticas ligadas al cuerpo y sexualidad de las mujeres que nos fueron históricamente expropiadas. A las mujeres el patriarcado nos recluyó en el ámbito privado, privándonos así del control de nuestros cuerpos.

El ejercicio de la sexualidad, de la reproducción, de la maternidad y la formación de las familias son algunos de los temas más debatidos y cada vez más puestos en agenda desde los estudios de géneros. Estos temas son complejizados cuando hablamos de mujeres que padecen algún tipo de enfermedad mental y/o discapacidad. Si a las mujeres nos costó hacernos oír y posicionarnos como sujetos de derecho en el marco de esta organización social patriarcal, cuánto más costoso es para aquellas que, por tener algún padecimiento mental, suelen ser consideradas como locas o que tienen algún tipo de discapacidad, cualidad que como parte de los prejuicios (Baleiro y Pagano, 2018) se las piensa como mujeres asexuadas. En tal sentido reafirmamos nuestro postulado de que no todas las mujeres podemos hacernos oír de la misma manera.

III. Discurso jurídico sobre los cuerpos y sexualidades de las mujeres con discapacidad o padecimiento mental .

Para seleccionar las sentencias a analizar, se procedió a la búsqueda en la base de datos La Ley *online* a través de tesauros que dan los siguientes resultados⁷: *capacidad* (34), *determinación/restricción a la capacidad* (33), *insania* (7), *persona con capacidad restringida* (7), *sentencias de restricción a la capacidad jurídica* (10), *ligadura de trompas de falopio* (2), *anticoncepción* (sin resultados), *contracepción quirúrgica* (1). Realizado el entrecruzamiento manual de datos y descartando aquellas que no fueran pertinentes o estuvieran repetidas, resultó un total de 18 sentencias. Sin embargo, nuestro corpus de análisis lo constituyen las 12 sentencias vinculadas a procesos de restricción de la capacidad que tienen como protagonistas a mujeres. Tres sentencias son de primera

⁷ La cantidad de resultados aparece entre paréntesis.

instancia (Caso 6 “Liliana”, caso 8 “Patricia” y caso 9 “Marina”⁸), las demás son de segunda instancia⁹.

En relación con las sentencias cuyas protagonistas son mujeres, sólo en dos de ellas se consigna la edad de la mujer a la que se le restringe la capacidad. Si se pretende que la sentencia de restricción de la capacidad deje de ser un documento del tipo formulario que se aplica para todas las personas por igual sin importar las particularidades que presenta su caso, es llamativo que ni siquiera se consigne la edad de la persona. Muchas veces faltan elementos de subjetivación en el texto de la sentencia, lo que no es un buen augurio en relación a cómo es abordada la persona -y sus derechos- a lo largo del expediente. En una de las sentencias (caso 4 “Yamila”), el primer voto del fallo el juez no individualiza adecuadamente si se trata de una mujer o un varón, intercambiando los géneros de la persona sistemáticamente, permitiéndonos dudar acerca de un conocimiento acabado, no ya de la persona sobre la que van a recaer las restricciones, sino incluso del trámite del expediente en tratamiento. La particularidad de los procesos de determinación de la capacidad se evidencia en que los efectos de las sentencia son trascendentes en la vida de las personas, y por ello se debe “[erradicar] *la "solución" uniforme y homogeneizante prevista por el Cód. Civil derogado, lo que [da] lugar a un proceso donde la persona tiene un rol protagónico*” (Caso 2 “Juana”, p.6).

En cuanto a las consideraciones generales que se desprenden del análisis de las sentencias, debemos señalar algunas cuestiones relevantes. En principio, observamos en las sentencias un despliegue de aquello que definimos como “pedagogía judicial”: los tribunales se encargan de ahondar en explicaciones acerca del nuevo paradigma de derechos humanos que inaugura la entrada en vigencia del nuevo CCyC haciendo un contrapunto con las disposiciones del código de Vélez. De la misma manera, también de dejan entrever resistencias ideológicas a las nuevas disposiciones pero que se aceptan con resignación. Es evidente que el cambio de paradigma le sustrae una cuota de poder a los jueces y las juezas porque las nuevas disposiciones que se enmarcan en el sistema de derechos humanos considera a la capacidad como la regla, y a las personas con

⁸ Utilizamos nombres ficticios para referirnos a los casos, tanto para resguardar la identidad de la persona y en parte para no continuar con la despersonalización que se produce en los procesos judiciales.

⁹ El fallo GAM (caso “Andrea”) es de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires y se dicta en virtud de un recurso de inaplicabilidad de ley.

discapacidad como sujetos de derechos que deben ser escuchadas y la resolución final no puede hacer caso omiso a esa voz.

También observamos que los criterios de autoridad para resolver las presentaciones siempre provienen de la dogmática jurídica: doctrinarios y doctrinarias del derecho que realizan una interpretación acerca del alcance del articulado del CCyC. Se echa de menos que el poder judicial dialogue con otras disciplinas pertinentes para la intervención en estos procesos, como por ejemplo la sociología, el trabajo final, la psicología, etcétera. La única disciplina no jurídica referenciada es la medicina, al momento de diagnosticar trastornos irreversibles.

La mayoría de las sentencias se abocan a resolver cuestiones patrimoniales de las protagonistas, y en ellas se evidencian desavenencias familiares acerca de los cuidados recibidos por parte de la mujer protagonista. En esa línea, algunas de las apelaciones a la designaciones de apoyos o curadores/as tiene que ver con no escuchar las preferencias de las mujeres, y esto es trascendente al momento de pensar en el protagonismo de las mujeres sujeta a proceso: ¿son escuchadas? ¿cómo se recibe su testimonio?

En estas sentencias también se apela una disposición que aparece como un cliché judicial pero que tiene efectos concretos en la vida de las personas. Bajo la fórmula de restringir actos con trascendencia jurídica, se engloban la posibilidad de contraer matrimonio, reconocer hijos e hijas y la posibilidad de decisión acerca de tratamientos vinculados con la salud o actos personalísimos y que nos invita a pensar aquello que, a nivel discursivo la sentencia, calla, omite y silencia. Ese recorte habla también de un tipo de justicia que se administra, centrada en lo patrimonial y patriarcal por descarte, porque no analiza las particularidades del género de los/as protagonistas del proceso. Esta es la única dimensión que encontramos en las sentencias vinculada a la esfera de los derechos sexuales y (no) reproductivos de estas mujeres, aunque la visibilización de estos derechos persiste ausente, aun en la sentencia en que se autoriza a una mujer bajo curatela a contraer matrimonio.

En la sentencia sobre el caso de Marina, una mujer con capacidad restringida en virtud de contar con un retraso mental moderado, se evidencia que las consideraciones que priman son las patrimoniales. La sentencia se origina en una solicitud de autorización para contraer matrimonio con su pareja, y padre de su hijo - actual curador- con quien mantiene

una unión convivencial hace 20 años. El juez autoriza el matrimonio, citando la LSM, la CDPD y la propia intención de la mujer -manifestada en la audiencia personal- y los informes que acrediten sus manifestaciones. Del análisis en profundidad de la sentencia, lo que surge es que el matrimonio es una especie de reaseguro para la mujer en vista a los derechos previsionales que adquiere, pero en este caso el poder judicial no hace más que consolidar una situación que de hecho existe, ese vínculo sexo-afectivo de pareja del cual tuvo un hijo, pero que no existen referencias a si pudo planificar dicho embarazo y/o ejercer la responsabilidad parental.

IV. El caso de “Andrea”.

Andrea es una mujer con un diagnóstico de retraso mental y epilepsia, y madre de dos hijas y un hijo. Este último, es producto de una violación incestuosa cometida por el progenitor de Andrea. La causante vive en un departamento detrás de la casa de su progenitor y progenitora, y es víctima de violencia física, psicológica, sexual y económica y patrimonial por parte de su progenitor. En ocasión de concurrir al hospital por un cuadro de bronquitis de su hijo menor (en ese momento de 5 meses de edad), el Estado se enteró del origen incestuoso del niño, se toman medidas de abrigo en relación a las niñas y el niño y se inicia una causa penal por abuso sexual con acceso carnal. Allí se inicia una larga y crítica ruta de más de 5 años en donde Andrea solicitó sistemáticamente a la administración de justicia ejercer el maternaje de sus hijas e hijo.

En este devenir judicial, el tribunal de familia de Quilmes ordenó la suspensión del ejercicio de la responsabilidad parental de Andrea, sobre sus dos hijas y su hijo en una conjugación perversa de las normas del Código Civil y la CDPD. Declaró el abandono y estado de adoptabilidad de las niñas y el niño, en contra de la voluntad de la madre, estableciendo que “... en su actual situación, la Sra. A. M. G. no puede asumir por sí el conjunto de deberes que la función materna le exige. No está en condiciones de resguardarse a sí misma de peligros concretos, ni de proteger a sus hijas (véase fs. 197) debido a su propia vulnerabilidad psíquica...” (p. 27). Ante esta resolución, Andrea solicitó ante la Suprema Corte de la provincia, un nuevo pronunciamiento que reconozca su derecho a ejercitar la responsabilidad parental con asistencia y supervisión institucional.

El subprocurador general dictaminó atendiendo a la solicitud de Andra. Entendió que la sentencia había incurrido en un “vicio grosero”, dado que previa a la suspensión del derecho a ejercer su responsabilidad parental, debería haberse agotado las vías de los apoyos institucionales. El subprocurador plantea que el Estado no debe desentenderse de la situación que atraviesa Andrea y por ello existen figuras que podrían acompañarla en su maternaje.

Llegado el turno de la SCBA, la resolución final fue construida con fragmentos de los votos de los diferentes jueces¹⁰, pero se resolvió que efectivamente Andrea no estaba en condiciones de ejercer su responsabilidad parental, se declaró en estado de adoptabilidad a las niñas y niño (sin determinar qué tipo de adopción, dado que entienden que eso debe resolverse en el expediente de adopción), se sugieren medidas para resolver la situación habitacional de la mujer, se piden explicaciones a la (no) intervención del fuero penal en la denuncia por abuso sexual con acceso carnal, y se manda a confeccionar un protocolo para juzgar con perspectiva de género, entre otras medidas. En el fallo hay tantos elementos reclamados por el feminismo jurídico que es increíble que se haya resuelto en contra de los derechos de la mujer. Abundan precedentes del sistema interamericano de derechos humanos, fallos de la Corte IDH sobre los derechos humanos de las mujeres, e incluso hay citas a teóricas feministas como Leonore Walker. Sin embargo, la solución es altamente vulneratoria de los derechos de Andrea que quería seguir maternando a sus hijas e hijo, dado que le niegan esa posibilidad. Increíblemente, a pesar de la abundancia de legislación y jurisprudencia inspirada en una perspectiva de género feminista, se construye un interés superior de los/as niños/as que estaría en contraposición de los derechos de su madre con discapacidad y que funciona y da argumentos para el privarle derechos, sancionarla, rompiendo incluso el mandato que el patriarcado asigna a las mujeres: la maternidad y en este caso, y pese al panorama aberrante en que se concibe su hijo más pequeño, aun elegida en su ejercicio por Andrea.

Esta incapacidad imputada a Andrea para maternar y por “poner en riesgo a sus hijas e hijo” invisibiliza, como planteó el subprocurador, la responsabilidad de los hechos por parte del progenitor de Andrea, quien al momento de la sentencia de la SCBA y con

¹⁰ En este apartado hablaremos de jueces en masculino dado que la única integrante del supremo tribunal adhirió al voto del Dr. De Lazzari y fue la única que no hizo ninguna apreciación sobre la causa.

una investigación penal en su contra, seguía habitando el inmueble del cual se había pedido la exclusión sin éxito. La situación de violencia de Andrea motiva que el superior tribunal de la provincia se preocupe por su condición de víctima, pero también puede interpretarse como un castigo a la víctima por ser víctima, o por haber denunciado las violencias, dado que se le quita la posibilidad de lo que ella reclamaba: el ejercicio de la maternidad de sus hijas e hijo. La voz de la mujer en esta sentencia se encuentra completamente enmudecida. A pesar de que se aclara que la sentencia no es una sanción a la madre, la asunción de que el interés superior de las niñas y el niño se contrapone con los derechos de su madre aparece como prejuicioso.

En este fallo, se deja leer entre líneas, un modelo muy fuerte sobre la familia al que Andrea se sustrae por su condición de mujer sola con discapacidad y pobre, sin contención. La comparación con el caso de Marina es interesante. Ambas padecen un retraso moderado leve, pero sus historias de vida y contexto son distintas, lo que produce una intervención de la administración de justicia diferente: que un caso permite y en otro prohíbe, sanciona. Por último, hay entre líneas, un mensaje muy perturbador: si una mujer-madre con discapacidad sufre situaciones graves de violencias, mejor no denunciar, porque el resultado puede ser perder a tus hijas e hijo. La perversión de la intervención estatal es patente: el Estado no intervino para evitar que se violen sus derechos, ni garantizó el ejercicio de sus derechos sexuales y (no) reproductivos, por ejemplo habilitando la posibilidad de pensar la interrupción del embarazo (Iglesias y Palacios, 2018) producto de una violación como resulta el caso, sino que, de alguna manera, perpetuó esa violencia.

Por último, y no es un dato menor, en uno de los votos (Petiggiani) el juez se pregunta sobre la conveniencia, para el niño, del sostenimiento de los vínculos con su madre, dado que como su gestación fue producto de una violación incestuosa, el conocimiento de los datos filiatorios podría generar grave impacto. De este apartado se pueden derivar dos cuestiones: la primera es que si una mujer queda embarazada producto de una violación incestuosa -y decide continuar con el embarazo- podrían negarle el contacto con ese hijo por el impacto que podría generar en él conocer su identidad filiatoria. Y en segundo lugar, que los procesos de vinculación afectiva que los niños y niñas con sus “actuales guardadores” se refuerzan por una administración de justicia que tardó más de 5

años en expedirse, con lo cual se refuerza el mensaje que es mejor sustraerse en estos casos a la actuación de la administración de “justicia”.

VI. Reflexiones finales

Del análisis de nuestro corpus de sentencias surge que, en líneas generales, los derechos sexuales y (no) reproductivos de las mujeres con discapacidad en procesos de determinación de la capacidad, constituyen una dimensión invisibilizada o ignorada por parte de la administración de justicia. La interpretación de este dato no es homogénea. Por un lado puede leerse esto como positivo: el poder judicial no se entromete en aquellas dimensiones de la privacidad de las mujeres que no están sujetas a debate.

Por otro lado dicho respeto a la privacidad puede leerse como el desentendimiento del Estado en torno a garantizar derechos, tal como se ha obligado en los tratados de Derechos Humanos del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y que implica un rol diferente de la Administración de Justicia: activo, donde indague, no para restringir, sino para conocer si existen derechos vulnerados, por ejemplo el derecho a la salud o a la educación sexual integral; y en función de ello actuar, procurando su satisfacción que implica acciones y políticas públicas por parte del Estado.

Sin embargo, la interpretación más positiva acerca de la no-intromisión del poder judicial rápidamente se distorsiona al analizar el caso de “Andrea”. El poder judicial se inmiscuye, y mucho, en la esfera de los derechos sexuales y (no) reproductivos -pero en ningún caso para la reparación de derechos vulnerados y su prevención- como también en la esfera de los derechos reproductivos de las mujeres, muchas veces desde posturas estereotipadas y respondiendo a un modelo de familia cristalizado en el pasado. Esta intervención evidenciaría aparentes contradicciones que no son tal: se permite a “Andrea” contraer matrimonio pero no ejercer la responsabilidad parental. Esta restricción a sus derechos se enmarca en una consideración de las mujeres como cuerpos gestantes al servicio del patriarcado capitalista.

Como hemos analizado, al introducir el cliché acerca de la restricción a las mujeres de actos con trascendencia jurídica, que encubre la posibilidad de contraer matrimonio o reconocer vínculos filiatorios, se permite también la derivación a la restricción del

maternaje de estas mujeres, sin siquiera una auto-crítica al rol del Estado ausente para garantizar sus derechos.

Nos preguntamos: ¿Son escuchadas estas mujeres por el poder judicial?. En las sentencias analizadas, sólo cuando esa voz no incomoda. ¿Permean los estereotipos de género sentencias de esta índole? Si, los estereotipos de género acerca de las mujeres y las mujeres-madres están presentes. No sólo se trata de cómo deben comportarse, sino adquiere una faz ontológica: *cómo deben ser*.

Bibliografía utilizada:

- Andriola Karina A. (2017) “Cuando la enfermedad mental y/o la discapacidad interpela a las familias: el cuidado en las sentencias de determinación de la capacidad” presentada en la Comisión 4, Familia, infancia y Adolescencia: las respuestas del Campo Jurídico del XVIII Congreso Nacional VIII Congreso Latinoamericano de Sociología Jurídica y, UNCuyo, Mendoza del 10 al 12 de octubre de 2017.
- Bourdieu, Pierre; Teubner, Gunther. (2000). La fuerza del derecho. Bogotá: Siglo del Hombre Editores. Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Ediciones Uniandes, Instituto Pensar.
- Brown, Josefina. (2014). Mujeres y ciudadanía en Argentina. Debates teóricos y políticos sobre derechos (no) reproductivos y sexuales (1990-2006). Buenos Aires: Editorial Teseo.
- Baliero M. de los Ángeles y Pagano Luz M. (2017) . Los derechos sexuales de las mujeres con discapacidad. Necesidad de visibilizar la problemática con el objeto de remover aquellos obstáculos que le impiden su efectivo ejercicio. Ponencia presentada en el Congreso Internacional de Familia, Mendoza 2018. Disponible en <http://congresoderechofamiliasmendoza.com/wp-content/uploads/2018/07/Baliero.-Pagano.-1.pdf> (28/8/2018)
- Costa, Malena. (2016). Feminismos jurídicos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Didot.

- Hunter, Rosemary; McGlynn, Clare; Rackley, Erika. (2010). “Feminist Judgments: An Introduction” En: Hunter, McGlynn, Rackley. (Eds.). Feminist Judgements. From Theory to Practice. Orford and Portland, Oregon: Hard Publishing.
- Iglesias María Graciela y Palacios Agustina (2018). Derechos sexuales y reproductivos. Aborto en personas con discapacidad, autonomía vs. aborto selectivo. Ponencia presentada en el Congreso Internacional de Familia, Mendoza 2018. Disponible en <http://congresoderechofamiliasmendoza.com/ponencias-2/comision-4/> (28/8/2018)

Referencias

- Caso 1 “Laura”. “B.L. s/ determinación de la capacidad jurídica”. CACC San Isidro, Sala I. 16/03/17.
- Caso: 2 “Juana”. “D., J. s/ insania y curatela”. CACC Mar del Plata, Sala III. 22/12/2015.
- Caso: 3 “Amalia”. “E. d. V., A. M. s/ insania y designación de curador” CA Concepción del Uruguay, Sala CyC. 05/10/2015.
- Caso:4 Yamila. “G. Y. s/ declaración de incapacidad”. CACC Gualeguaychu, Sala I. 23/12/2015.
- Caso: 5 “Elena”. “L., E. A. s/ declaración de insania”. CACC Salta, Sala II. 08/04/2016.
- Caso: 6 “Liliana”. “S., L. R. s/ restricción de capacidad”. JCC Venado Tuerto (1ºNom). 09/11/2016.
- Caso: 7 “Noelia”. “R., N. E. s/ declaración de insania” C2ºCCMinasPazyTrib Mendoza. 11/08/2015.
- Caso: 8 “Patricia”. “P., M. F. s/ demanda de limitación a la capacidad” JCCy Familia (4ºNom.) 12/05/2017.
- Caso 9 “Marina”. “P., M. P. s/ dispensa para contraer matrimonio” JCC N°2 Azul. 19/05/2016.
- Caso 10 “Tatiana”. “N., T. M. N. s/ declaración de incapacidad” CA Concordia Sala CC II. 22/10/2015.
- Caso 11 “Tamara”. “L., T. E. s/ determinación de la capacidad” CNAC, sala B. 18/11/2015.
- Caso 12 “Andrea”. “G., A. M. insania y curatela y causas acumuladas” SCBA. 04/11/2015.